www.flacsoandes.edu.ec

CIUDADES

Volúmen 7

Arturo Almandoz
Editor

Caracas,
de la metrópoli súbita a la meca roja

OLACCHI
Organización Latinoamericana y del Caribe de Centros Históricos

Editor general
Fernando Carrión

Coordinador editorial
Jaime Erazo Espinosa

Comité editorial
Fernando Carrión
Michael Cohen
Pedro Pírez
Alfredo Rodríguez
Manuel Dammert G.

Diseño y diagramación
Antonio Mena

Edición de estilo:
Alejo Romano
Ana Aulestia

Impresión
V&M Gráficas

ISBN: 978-9978-370-29-2
© OLACCHI
El Quinde N45-72 y De Las Golondrinas
Tel.: (593-2) 2462 739
olacchi@olacchi.org
www.olacchi.org
Quito, Ecuador
Primera edición: diciembre de 2012

Contenido

Presentación 7

Introducción
Caracas, entre la ciudad guzmancista
y la metrópoli revolucionaria 9
Arturo Almandoz

I. Desarrollismo, metropolitanización y modernidad

Modernidades alternas del urbanismo caraqueño:
Territorio, arquitectura y espacio urbano 29
Lorenzo González Casas

Caracas, modernidad y escala urbana:
Una aproximación interdisciplinaria 73
Nancy Dembo, José Rosas e Iván González V.

Modernidad urbanística y
Nuevo Ideal Nacional 95
Arturo Almandoz

II. De la Venezuela saudita al Caracazo

Desarrollo urbano y vivienda:
La desordenada evolución hacia un país de metrópolis . . . 105
Víctor Fossi Belloso

Del sistema de ciudades venezolano 127
Marco Negrón

Caracas: De la Colonia al socialismo del siglo XXI. Espacio, clase social y movimientos ciudadanos 155
María Pilar García-Guadilla

III. Hacia la Caracas roja

Espacio y dinámica de la ciudad violenta 199
Silverio González Téllez

Caracas: Su sistema de transporte y movilidad 213
Josefina Mundó Tejada

El crecimiento urbano y la pérdida de los valores ambientales 235
Rosa María Chacón

La cultura constructiva informal y la transformación de los barrios caraqueños 263
Iris Rosas Meza

Espacio, revolución y resistencia: Lugares ordinarios y eventos extraordinarios en Caracas 285
Clara Irazábal y John Foley

Espacio, revolución y resistencia: Lugares ordinarios y eventos extraordinarios en Caracas[1]

Clara Irazábal y John Foley*

Muchos académicos han argumentado que el espacio público es un prerrequisito para la expresión, la representación, la preservación y el mejoramiento de la democracia (Boudreau, 2000; Caldeira, 2000; Holston y Appadurai, 1999; Low, 2000; Sassen, 1996; Low y Smith, 2006). Ello no puede ser más cierto que en las capitales latinoamericanas en décadas recientes, en las que las demostraciones políticas han jugado un papel decisivo en la caída de regímenes totalitarios y en el reestablecimiento de las democracias. Caracas es un ejemplo de cómo espacios urbanos clave han alojado demostraciones populares desde que Hugo Chávez deviniera presidente en 1998. Edificios públicos –como las sedes del poder político y militar– y privados –como las casas matrices de corporaciones mediáticas– sirvieron de íconos arquitectónicos y telones de fondo para tales eventos.

Si bien el rol de los factores sociales, políticos y económicos en estos sucesos ha atraído mucha atención (Ellner y Hellinger, 2004; Márquez y Piñango, 2003; Méndez, 2004; McCaughan, 2004; Santamaría, 2004)[2], sabemos menos sobre la influencia de las dimensiones físicas y simbólicas

1 El presente texto es una versión revisada y resumida de Irazábal y Foley (2008); traducción de A. Almandoz.

* Clara Irazábal es profesora asistente en la Universidad de Columbia, New York. Dirección electrónica: cei2108@columbia.edu.
John Foley era profesor en la Universidad Central de Venezuela (UCV), Caracas.

2 Es extensa la literatura sobre este tema. Para una síntesis, véanse Ellner y Hellinger (2004) y McCaughan (2004).

del espacio público[3]. Nuestro argumento es que la localización urbana y el contexto de algunos edificios y espacios, su accesibilidad a diferentes grupos desde varias áreas de la ciudad y su valor simbólico relativo han sido cruciales en el despliegue de los eventos políticos, especialmente durante el golpe de Estado y la subsecuente reinstauración de Chávez.

Los paisajes de Caracas

Pese a que cubre 912 050 km^2 –poco más de dos veces el tamaño de California–, Venezuela tiene una población relativamente pequeña: de 25 373 281 habitantes, según estimaciones de julio del 2005. Debido a contar con las sextas reservas petroleras más grandes del mundo, la economía nacional es altamente dependiente de los petroquímicos[4]. Sin embargo, lo recaudado por estos recursos no ha permeado socialmente, pues ha dejado al 49,4% de la población en pobreza; al 21,7%, en indigencia; y al 71,7%, viviendo por debajo de la línea de pobreza (ONU y Cepal, 2001: 57), y todas las estimaciones indican un dramático incremento entre 1975 y 1995. De acuerdo a la medida basada en ingreso (Riutort, 1999), un 33% vivía en pobreza en 1975 y un 70%, en 1995. Con la pobreza más que duplicada en ese período, el número de hogares en pobreza extrema se triplicó, de aproximadamente 15% a 45%. Si bien otras medidas no basadas en ingreso muestran valores algo menores, Venezuela registró el mayor incremento de pobreza y contaba con la más alta proporción de población pobre en América Latina (Wilpert, 2003a).

3 Contribuciones excepcionales en este sentido han sido hechas por García-Guadilla (1998, 2002, 2003 y 2004), García-Guadilla y otros (2004), López Maya (1999 y 2003), López Maya y Lander (2006), Lander y López Maya (2005) y Navarrete (2005).

4 Según el *Oil and Gas Journal* y la Administración de Información de Energía, había ocho países con producción anual de petróleo más alta que Venezuela, pero solo cinco con reservas comprobadas más grandes, todos en el Medio Oriente (Appenzeller, 2004: 90-91). Esto subraya la importancia estratégica de Venezuela para los Estados Unidos, que es, por mucho, el mayor consumidor mundial, seguido de China y Japón. Un 13% de las importaciones petroleras estadounidenses provienen de Venezuela (Appenzeller, 2004: 89).

No es una sorpresa que esta notable desigualdad atice la lucha política contemporánea. En las principales ciudades del país, como Caracas, la pobreza está reflejada en barrios que alojan a más del 40% de la población[5]. Aproximadamente a mil metros sobre el nivel del mar, los 5 100 000 habitantes caraqueños (2004)[6] ocupan un estrecho valle bordeado por montañas y alcanzan una densidad de 1 011 habitantes en un área metropolitana de 2 050 km^2. Muchos de los barrios pobres están sobre cerros empinados, particularmente en Petare, al este –que también aloja clases medias y altas–, y Catia y La Vega, al oeste, un área principalmente de clase media baja y obrera. Los barrios suelen surgir a lo largo de las riberas, fuera de la vista hasta que las inundaciones causan destrucción y los hacen más visibles.

Justo en el medio de la ciudad están los curveados jardines del otrora suburbio Caracas Country Club. En el este, los bloques de alta densidad de apartamentos de clase media alta se encuentran espaciados en calles regulares o trepan precariamente sobre las colinas. Hacia el oeste destacan grandes proyectos de vivienda pública, incluyendo el masivo conjunto 23 de Enero, inspirado en el funcionalismo de Le Corbusier[7]. En varias partes de la ciudad, edificios de apartamentos de clase media baja atestan las estrechas calles de los asentamientos tradicionales. Sobre los cerros, o arrimados a las exclusivas quintas de los ricos del este, se encuentran las intrincadas y laberínticas calles, callejones y escaleras de los barrios. El

5 Esta aproximación oculta la dificultad de definir los límites, la densidad y la forma urbana de barriadas autoconstruidas, las cuales se estima que alojan al 60% de la población venezolana (Architectural League of New York, 2002).

6 La población caraqueña podría ser más grande, Sin embargo, los datos tienden a subestimar a la población de los barrios debido a las dificultades de acceso y a la existencia de residentes ilegales. Libertador, el municipio más populoso, alcanzaba 1,9 millones de personas en 2004.

7 Este proyecto de vivienda pública está compuesto de 70 edificios con un total de 9 176 apartamentos y servicios comunales (escuelas, mercados, etc.). Bautizado así para recordar el derrocamiento del dictador Pérez Jiménez en 1958, fue originalmente concebido para 60 mil habitantes, aunque actualmente alberga a 76 mil. Tomando en cuenta las casas autoconstruidas entre edificios, la población total del área alcanza los cientos de miles. El 23 de Enero está muy politizado y se localiza a distancia peatonal del Palacio Presidencial de Miraflores.

corazón comercial e industrial más dinámico se extiende a lo largo del eje del valle. La mixtura de usos y estilos arquitectónicos es unida visualmente por El Ávila, cerro que despunta otros mil metros hacia el norte, así como por la vegetación tropical que brota de cualquier espacio vacío.

Caracas es una metrópoli fragmentada administrativa y políticamente, pues se extiende entre dos entidades independientes: el estado Miranda y el Distrito Capital. Sede del gobierno nacional, este último tiene solo una municipalidad –Libertador–, mientras que las otras cuatro –Chacao, Sucre, Baruta y El Hatillo– se localizan en el estado Miranda[8]. Adicionalmente, un nivel metropolitano de gobierno fue creado en el 2000 para coordinar las actividades de las cinco municipalidades.

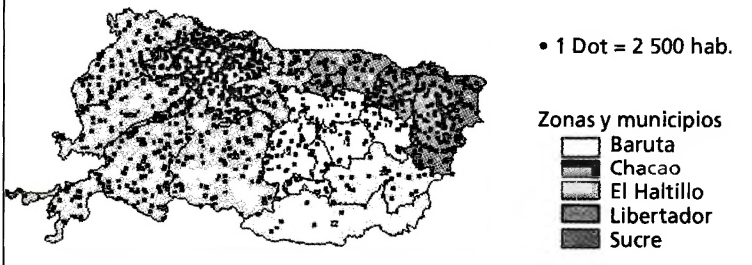
Aproximadamente, el 65% de la población metropolitana se encuentra en Libertador y el 23%, en Sucre, lo que deja solo 12% a las otras tres. La mayoría de los barrios están ubicados en Libertador –que alberga al 65% de los habitantes informales– y Sucre; hasta 2004, estos dos municipios tenían alcaldes oficialistas (afines a la línea del gobierno nacional), mientras que los de Baruta, Chacao y El Hatillo eran opositores. De manera similar, el alcalde metropolitano hasta 2004, Alfredo Peña, pasó a ser activo oponente del gobierno nacional, aunque había sido electo con el apoyo de este. Sin embargo, en las elecciones del 2004, el respaldo a la administración chavista creció con la elección de Juan Barreto como alcalde metropolitano.

Estas fisuras fueron exacerbadas por las políticas económicas neoliberales implementadas por los gobiernos venezolanos en los años ochenta. Junto a la corrupción y la mala administración, esos gobiernos redujeron en mucho los niveles de vida. La marcada disminución del gasto público fue especialmente dañina para los pobres, en la medida en que el gasto per cápita fue rebajado en un 40% entre 1980 y 1993. El gasto en educación fue cortado en más del 40%; la vivienda y el desarrollo urbano, en 70%; y los servicios de salud, en 37%. Como resultado, entre 1984 y 1995, los pobres se duplicaron a más del 66% de la población total, y la extrema pobreza subió del 11% al 36% (Roberts, 2004). Para 1982, el 60% de la

8 Estas municipalidades fueron creadas por la división del antiguo distrito Sucre, en las reformas municipales de 1989.

población podía considerarse parte de la privilegiada clase media venezolana, pero para 1990 solo podía hacerlo el 34% (Márquez y Piñango, 2003). La economía continuó deteriorándose entre 1993 y 2005 (García-Guadilla y otros, 2004: 10)[9]. La siguiente secuencia de mapas presenta el análisis socioespacial y socioeconómico del área metropolitana con datos de 1998[10]. De manera previsible, estos factores están correlacionados con las preferencias políticas de la población, tal como se señala en el Mapa 5. Ese mapeo ayuda a entender los usos y significados del espacio urbano en las reformulaciones dinámicas de la democracia y ciudadanía en la ciudad.

Mapa 1. Municipalidades y población de Caracas*

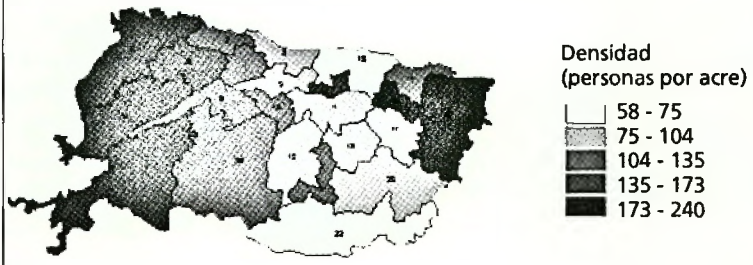


* Los municipios más poblados son Libertador y Sucre.
Fuente: Elaborado por Josefina Flórez y Nelliana Viloria en 2000 con datos de 1998.

9 Se observan importantes disparidades en las estadísticas encontradas para este período; en esta cita, el porcentaje de pobres es diferente de las cifras dadas arriba. Adicionalmente, la proporción de 60% de clase media en 1982 corresponde más o menos a los "no pobres" en otros recuentos, pero esa categoría no equivale necesariamente a "clase media".

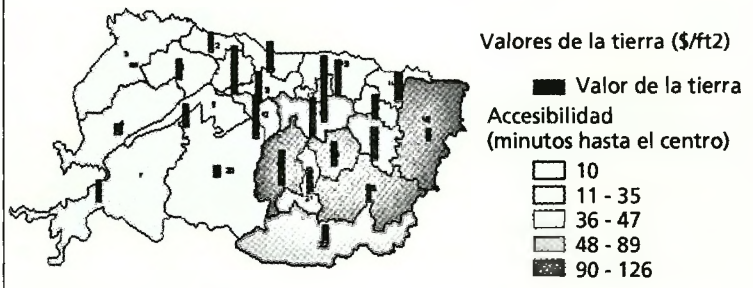
10 Todos los mapas fueron elaborados por Josefina Flórez y Nelliana Viloria en el 2000 con información actualizada para 1998, sobre la base de originales de 1992 que formaron parte de la tesis doctoral de Flórez, "Accesibilidad, calidad urbana y grupos socioeconómicos en el patrón de localización residencial". Las fuentes primarias de información fueron: para ingreso, la estratificación propuesta por Datanálisis según sectores socioeconómicos de A a E (1998); para valor promedio del dólar estadounidense, Banco Central de Venezuela (BCV); para densidad, proyecciones de la Oficina Central de Estadística e Informática (OCEI) para 1998; para uso del suelo, registros Akros de enero a diciembre de 1998, siguiendo una metodología de Rivas y Padrón; y para accesibilidad, Josefina Flórez.

Mapa 2. Densidad de Caracas*



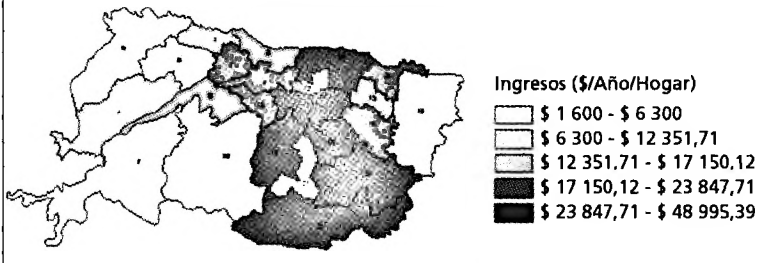
* Las áreas más densas están al este y al oeste de la metrópoli, donde se ubican barrios de ranchos y viviendas de clase media baja. El palacio presidencial donde reside Chávez está localizado en un área populosa y céntrica de Libertador.
Fuente: Elaborado por Josefina Flórez y Nelliana Viloria en 2000 con datos de 1998.

Mapa 3. Relación entre valores de la tierra y accesibilidad al centro de Caracas*



* Muchas instituciones gubernamentales están ubicadas en el centro de Caracas. La accesibilidad se mide en minutos de viaje en automóvil.
Fuente: Elaborado por Josefina Flórez y Nelliana Viloria en 2000 con datos de 1998.

Mapa 4. Distribución de ingreso anual por hogar en Caracas*



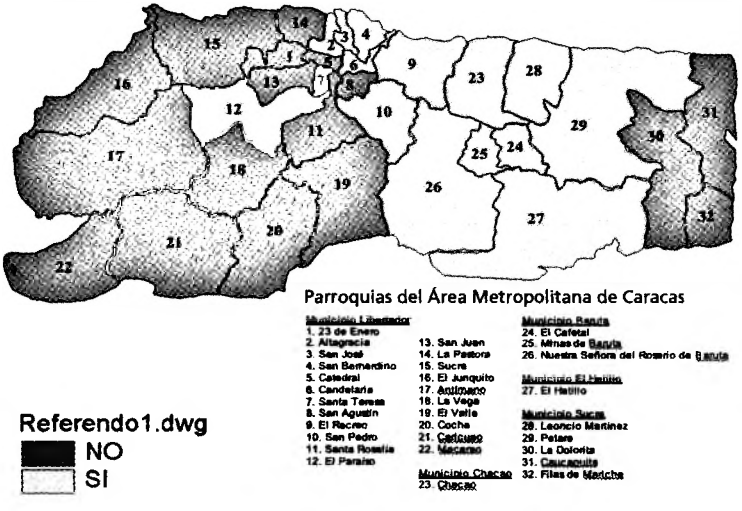
* El mapa ilustra la polarización del ingreso existente en la metrópoli.
Fuente: Elaborado por Josefina Flórez y Nelliana Viloria en 2000 con datos de 1998.

El Mapa 1 muestra las cinco municipalidades integrantes de la metrópoli; representando la población, el mapa confirma que los dos municipios más populosos son Libertador y Sucre, gobernados por alcaldes chavistas. De manera complementaria, el Mapa 2 ilustra la densidad de Caracas; de nuevo, las áreas más densas están al este y al oeste de la metrópoli, lo que coincide con las grandes concentraciones de barrios populares y principalmente autoconstruidos, así como con áreas de ingresos bajos y medios bajos. Es importante hacer notar que Miraflores, el palacio presidencial donde reside Chávez, está localizado en el denso distrito Libertador. El Mapa 3 claramente muestra que no hay correlación directa entre valores del suelo y la accesibilidad al centro urbano, donde se ubican Miraflores y muchas de las instituciones gubernamentales[11]. Las áreas con más altos valores del suelo son aquellas con densidades más bajas e ingresos más elevados, que corresponden a urbanizaciones formales consolidadas; de manera alternativa, las zonas de menor valor tienen las densidades más altas y los ingresos por hogar

11 Es importante tener en mente que Caracas tiene varias centralidades y un sistema de transporte de metro, y que la mayoría de la gente en áreas pobres no tiene carro, todo lo cual afecta los valores del suelo.

más bajos, lo que refleja en su mayor parte la urbanización informal. Puede detectarse una polarización del ingreso: la mayoría de los hogares de Libertador y Sucre percibe ingresos de hasta $ 6 300 por año para 1998, mientras que los del resto alcanzan más de $ 23 800 (excepto los barrios de Baruta, donde el ingreso anual es $ 12 300 dólares).

Mapa 5. Resultados del referendo revocatorio en Caracas*



* La gente a favor de revocar votó "sí" y los que estaban a favor de mantener a Chávez en el poder votaron "no". El patrón geográfico de voto se correlaciona con la clase.
Fuente: Elaborado por Nelliana Viloria en 2004.

El Mapa 5 muestra los resultados electorales del referendo del 2004 sobre la finalización de la presidencia de Chávez: los distritos con mayor densidad poblacional y tamaño, así como con menor ingreso y valor del suelo, votaron por mantenerla. Tal distribución geográfica y política se correlacionaba así con factores socioeconómicos, político-administrativos y espaciales, lo que tenía implicaciones en el uso del espacio público

para demostraciones políticas, especialmente durante abril del 2002, tal como será discutido en la siguiente sección.

Cronología de eventos políticos en el espacio público

Esta sección analiza las dimensiones políticas y espaciales de los sucesos anteriores y durante el golpe de Estado que puso al presidente Chávez fuera de palacio por 43 horas. De manera significativa, la población de muchos de los sectores que lo apoyaban en el oeste metropolitano –como estuvo evidenciado en el referendo (y en elecciones previas y subsiguientes)– tiene mejor accesibilidad al centro urbano que los que votaron en contra (Mapa 3). Es importante hacer notar, sin embargo, que los simpatizantes chavistas también aclamaron desde otros sectores metropolitanos (por ejemplo, Petare, El Valle y Caricuao) que no tienen similar accesibilidad; tampoco todos los barrios, aunque cercanos, cuentan con "buen" acceso. En otras palabras, pese a que la accesibilidad definidamente influyó, más importante aún fue la determinación de la gente para restaurar a Chávez en la magistratura. Ello permitió que significativos contingentes estuvieran presentes alrededor del Palacio de Miraflores en los días que llevaron al golpe del 11 de abril del 2002. Después de que Chávez fuera secuestrado, sus partidarios se organizaron rápidamente y para la siguiente noche se habían congregado en grandes grupos alrededor del Palacio Presidencial y del fuerte Tiuna; esta presencia, junto al apoyo del sector militar que permaneció leal a Chávez, eventualmente abortó el golpe.

Precedentes

Al describir el proceso político que llevó a los sucesos de abril del 2002, adoptamos la denominación del gobierno nacional referente a dos períodos de la historia venezolana reciente: la Cuarta República para el lapso que comienza con la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez (1952-1958) y finaliza en 1998; y la Quinta República para el

período siguiente a la elección presidencial de Hugo Chávez en 1998 y la subsiguiente promulgación de una nueva Constitución nacional en 1999[12]. En cada fase, la construcción sociopolítica y el uso del espacio urbano han sido factores en la definición del proceso político.

Cuarta República

Desde el derrocamiento del dictador Pérez Jiménez, en 1958, hasta la elección presidencial de Chávez, en 1998, los venezolanos escogían mandatario cada cinco años, usualmente entre el partido social-democrático AD (Acción Democrática) y el social-cristiano Copei (Comité de Organización Política Electoral Independiente). Los eventos públicos durante las campañas y los del Día del Trabajador, así como las celebraciones anuales de los aniversarios partidistas, eran grandemente orquestados. Mientras la izquierda tenía poco espacio para las demostraciones políticas espontáneas; estas se reducían a protestas estudiantiles, a veces apoyadas por miembros de facultades universitarias y de educación media, junto a militantes de esos partidos políticos minoritarios.

12 La constitución de 1811 marcó el comienzo de la Primera República, pero, dado que la élite criolla caraqueña no logró reunir apoyo popular para la causa independentista, una guerra civil definida racialmente estropeó los tempranos años republicanos. En 1813, Simón Bolívar conquistó Caracas, donde fue proclamado Libertador y estableció la Segunda República; pero, hacia 1814, las tropas enemigas expulsaron a Bolívar y a su ejército de la ciudad y pusieron fin al segundo ensayo republicano. Aunque Caracas permaneció en manos realistas, en 1819 el Congreso de Angostura –en la actual Ciudad Bolívar– estableció la Tercera República con Bolívar como presidente; las tropas independentistas finalmente liberaron la ciudad del dominio español en 1821. Con un siglo y medio de gobiernos democráticos y militares sucediéndose hasta 1959, la declarada ruptura con el pasado ha sido atribuida a la riqueza petrolera, la cual proveyó a los gobiernos de recursos materiales para ganar la población a la democracia, así como al espíritu de cooperación entre los partidos políticos nacionales que se concretó en el pacto de Puntofijo. En otro acuerdo de 1958, la Declaración de Principios y Programa de Gobierno, los principales partidos políticos (AD, Copei y URD) se pusieron de acuerdo en un conjunto de materias respecto de la economía, incluyendo el derecho de asociación y la negociación colectiva, así como los subsidios estatales para los pobres. El "espíritu del 23 de enero" informó la Constitución de 1961, la cual garantizaba un amplio rango de libertades cívicas e instituía una débil legislatura bicameral y fuertes poderes ejecutivos. El principal grupo excluido de los pactos políticos de 1958 fue la izquierda (Haggerty, 1993).

Las protestas seguían un patrón repetitivo: con frecuencia comenzaban de manera pacífica y hasta festiva, pero acababan frecuentemente en violentas confrontaciones con la policía, e incluso algunas veces arrojaron heridos y muertos. En este período, los sitios de lucha se restringían principalmente a los alrededores de los liceos, colegios y universidades públicas. Los mayores encuentros públicos tenían lugar en plazas de centros históricos o funcionales –O'Leary y plaza Venezuela– o en la avenida Bolívar, cerrada al tráfico para los eventos. Las protestas regulares en "lugares calientes" –como las plazas Venezuela y Las Tres Gracias, adyacentes a la Universidad Central de Venezuela, así como la avenida José Antonio Páez, frente al Instituto Pedagógico– eran seguidas de atascos de tráfico que devinieron rituales predecibles. Probablemente debido a la crisis económica, las protestas declinaron en la década de 1980, en la medida en que se disponía de menos fondos, se deterioraba la seguridad y se producía un desencanto con los partidos políticos tradicionales.

El "Caracazo" o "sacudón" de 1989 –reacción social contra las políticas neoliberales introducidas por el penúltimo presidente de la Cuarta República, Carlos Andrés Pérez; en particular, contra el incremento de las tarifas de transporte público– señaló una ruptura con los rituales de protesta establecidos. El 27 de febrero, un grupo de personas de los sectores más desprotegidos bloquearon las principales avenidas y autopistas, y paralizaron la ciudad; las clases media y alta reaccionaron con temor mientras se hacía realidad su siempre presente pesadilla: los habitantes de los barrios en los cerros decendiendo y apoderándose de la metrópoli. Expresando frustración, los desenfrenados caraqueños irrumpieron y saquearon centros comerciales y pequeños negocios de manera aparentemente desorganizada y anárquica; en brutal represión, la policía y los militares mataron a un número desconocido de personas –una estimación conservadora dice que 400, pero otras aproximaciones no oficiales los colocan en cuatro mil–[13]. Los toques de queda y los bloqueos duraron casi una semana y evidenciaron, en rápida escalada, una crisis de la democracia representativa en el país. Después del Caracazo, los desafíos al establecimiento político se

13 Debido al hallazgo de que el gobierno había enterrado civiles en fosas masivas y no los había contado.

hicieron más frecuentes y notorios: las protestas callejeras se incrementaron dramáticamente en la capital, aunque algunos años fueron más turbulentos que otros. Consiguientemente, cambió la percepción de la historia social venezolana, tal como explican López Maya y Lander:

> A inicios de los ochenta, había una idea generalizada según la cual los venezolanos se ubicaban entre los menos movilizados de América Latina. Se argumentaba que su sólida democracia, aceitada por la renta petrolera del Estado, había permitido establecer y consolidar canales de mediación y representación eficientes que conjuraban el conflicto social pronunciado y/o violento [...]. Esto ha sido contradicho por las últimas dos décadas y ha obligado a mirar de nuevo la "política de la calle" que se desarrolló en Venezuela desde 1958 (2006: 11).

El descontento político de los ochenta y noventa resultaba de una aguda crisis económica con pobreza creciente y polarización sociopolítica, corrupción rampante, pérdida de legitimidad de los partidos políticos y carencia de responsabilidad y justicia en medio de una creciente deuda pública. Adicionalmente, otro elemento que desafió al establecimiento después del Caracazo fue el descontento de militares de nivel medio con los líderes políticos del país, así como la repugnancia de haber tenido que tomar las armas contra los ciudadanos durante los disturbios, todo lo cual culminó en los fallidos golpes de Estado contra el gobierno de Pérez en febrero y noviembre de 1992. El primero fue liderado por el coronel Hugo Chávez en compañía de otros militares. A partir de este momento, un nuevo movimiento político que se había venido gestando en secreto como reacción a la crisis política se hizo visible y ganó impulso. Al mismo tiempo, aquellas organizaciones políticas y movimientos que habían sido excluidos del pacto de Puntofijo se juntaron a pesar de sus diferencias[14], de cara a lograr el objetivo de "democratizar la democracia" (García-Guadilla y otros, 2004: 11).

14 En el pacto de Puntofijo de 1958, el presidente Betancourt otorgó concesiones para un amplio cambio de las fuerzas políticas, pero mantuvo la hegemonía de los principales partidos, especialmente AD y Copei. Otros grupos fueron excluidos de los pactos políticos, particularmente los de izquierda (Haggerty, 1993). Los chavistas concibieron el pacto de Puntofijo en tanto símbolo esencial de la Cuarta República.

Para muchos venezolanos, este movimiento representó un proyecto político alternativo que ofrecía gran esperanza de reforma. Finalmente, Pérez fue forzado fuera del cargo y Rafael Caldera fue eventualmente electo presidente en 1993. Los disminuidos precios del petróleo no ayudaron a este último, y su período estuvo caracterizado por la inestabilidad política y la insatisfacción general con el gobierno. Muchos sintieron que Caldera traicionó al electorado cuando acudió por ayuda al Fondo Monetario Internacional (García-Guadilla y otros, 2004), todo lo cual provocó apasionadas protestas callejeras que demandaban responsabilidad y justicia.

Quinta República

El modelo político alternativo representado por los partidos identificados con el proyecto de Chávez congregó amplio apoyo popular y en 1998 ganó las elecciones con 56% de los votos; luego, asumió la presidencia del país, rebautizado como República Bolivariana de Venezuela. Su mandato representaba la interrupción de la dominación de AD y Copei. La aprobación de la nueva Constitución en 1999, con un 70% del voto, definió la "revolución pacífica", como la catalogó el gobierno. Poco después, nuevas elecciones presidenciales tuvieron lugar y Chávez fue reelecto por seis años con la posibilidad de otro período, como lo establecía la nueva Carta Magna. La reforma constitucional contemplaba asimismo una democracia participativa que involucraba al pueblo en la toma de decisiones, la valoración de los derechos humanos y el reconocimiento del multiculturalismo en Venezuela.

Además de eso, el régimen enfatizó la integración latinoamericana y cuestionó abiertamente los principios neoliberales y las condiciones impuestas por los organismos financieros internacionales. Impuestos, aranceles de importación y licencias fueron reforzados; la industria petrolera, nacionalizada; y su gerencia, cambiada[15]. Siguieron la reforma

15 La nueva ley petrolera "limitaba las compañías extranjeras a 50 asociaciones estratégicas y duplicaba los impuestos a ser pagados al Estado por barril extraído. También impuso, por vez primera, transparencia fiscal y rendimiento de cuentas por las turbias operaciones

de la tierra, para legalizar la tenencia de propiedades urbanas y rurales y redistribuir otras, junto a la modificación de derechos de pesca, para controlar la pesca de arrastre. Se acepta que estas eran pruebas de que el gobierno chavista fomentaría una reforma sustancial, si no revolucionaria, alienando en ese proceso a sectores de las clases media y alta. Una cuestión especialmente espinosa fue la reforma del suelo que llevó a la primera huelga de negocios en diciembre del 2001 (Wilpert, 2003b)[16].

Como resultado del cambio constitucional y su implementación, algunos grandes intereses en la Iglesia, los partidos políticos tradicionales, los militares, el sistema judicial, la burocracia gubernamental, las compañías públicas y privadas, las universidades, las artes y los medios han sido desafiados. "En países asediados por desigualdades extremas", explican García-Guadilla y otros. (2004: 20), "las separaciones de clase crean divisiones profundas, lo que hace difícil la articulación de propuestas universales". No sorprende, entonces, que emergiera una oposición fuerte y vociferante, si bien internamente fragmentada pero con acceso a recursos económicos sustanciales y que domina los medios masivos. Inicialmente apareció como una vigorosa oposición democrática, pero, el 11 de abril del 2002, las fuerzas antigubernamentales maniobraron hacia una posición desde la que se fomentó un golpe de Estado.

Los sucesos de abril del 2002

Para abril del 2002, las demostraciones y marchas ganaron intensidad, en la medida en que Chávez y los líderes de la oposición animaron a sus seguidores a tomar las calles. Cada grupo buscó demostrar que podía reunir mayores grupos de gente, y se generó controversia sobre las cantidades exactas. Algunos espacios fueron incluso rebautizados –por ejemplo, la plaza Francia pasó a ser plaza de la Libertad, apropiada y resguardada exclusivamente por las facciones opositoras–. Estas reterritorializaciones

de PDVSA, así como contenía provisiones que permitían al gobierno reestructurar la industria petrolera en su debido momento" (Wilpert, 2003b: 107).

16 Véanse Wilpert (2003b), Vila Planes (2003), Camejo (2002) y Medina (2001) para una descripción más detallada de estas reformas y sus implicaciones.

incrementaron las divisiones políticas y sociales y existentes.

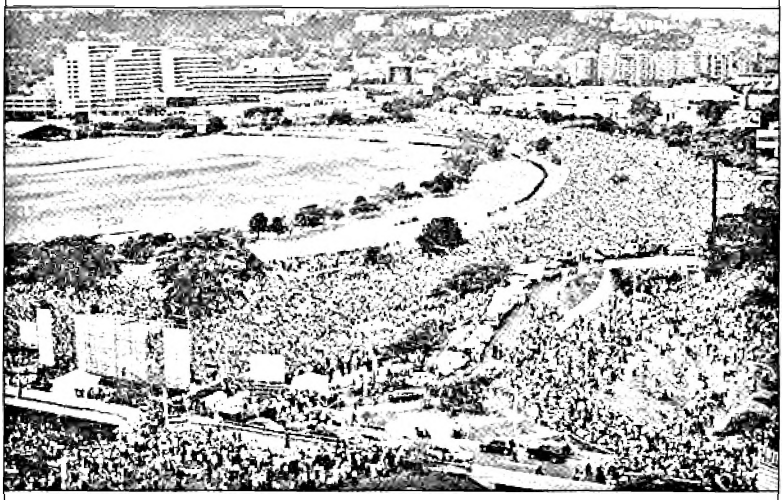
El 11 de abril, la oposición marchó contra el gobierno de Chávez (Fotografía 1). Desde un espacio anodino frente al edificio de PDVSA (la compañía petrolera del Estado) en Chuao, bautizado por la oposición como "plaza de la Meritocracia"[17], la marcha siguió pacíficamente a lo largo de la autopista Francisco Fajardo. Aunque la ruta legalmente permitida se encontraba dentro de las municipalidades de Chacao y Baruta, algunos líderes opositores convencieron a los marchantes para cruzar hacia Libertador en dirección al Palacio Presidencial. Cuando la manifestación alcanzó el límite de este municipio, un grupo de empresarios y militares de alto rango planeó un golpe de Estado que fue apoyado por representantes de importantes organizaciones civiles. Los actores intentaron legitimar su sedición mediante la presencia de numerosos protestantes, mientras recurrían a medios inconstitucionales y violentos para deponer al presidente (García-Guadilla y otros, 2004).

El clima político en el país había estado por meses muy tenso, y los creíbles rumores sobre un posible golpe de Estado habían emergido. Por lo tanto, los simpatizantes del gobierno habían rodeado por días el Palacio Presidencial en jugada preventiva. Cuando la marcha opositora llegó al área cercana al palacio ese 11 de abril, las fuerzas de seguridad se las arreglaron para mantener separados a los partidarios oficialistas y opositores, pero, como resultado de lo que parecían ser disparos de francotiradores alrededor de Miraflores, cerca de veinte personas murieron –incluyendo once protestantes oficialistas– y muchas otras fueron heridas en un intervalo de dos horas[18].

17 Chávez había reclamado que los gerentes de PDVSA estaban comprometidos con las agendas neoliberales que favorecían los intereses extranjeros; con sus posiciones comprometidas, los tecnócratas respondían que solo ellos tenían la experticia necesaria para dirigir la compañía. En su defensa, el espacio frente a PDVSA fue denominado plaza de la Meritocracia.

18 Fiscal general en el tiempo del golpe, Rodríguez (2005: 191) da los siguientes nombres de francotiradores: Roberto Francisco McKnight, Roger de Jesús Lugo Miquilena, Franklin Manuel Rodríguez, Jorge Hernán Meneses, Jesús Antonio Meneses, Nelson Enrique Rosales y John Carlos Garzón. "Esta última persona era colombiana, otra era de Panamá, McKnight era de los Estados Unidos y Jesús Lugo Miquilena tenía una falsa cédula de identidad venezolana". No todos los muertos eran manifestantes: algunos tra-

Fotografía 1. Marcha de los opositores al gobierno alrededor del aeropuerto de La Carlota, en la autopista Francisco de Miranda, a la altura de Altamira, 2002



Fuente: Irazábal y Foley (2008).

En medio de la confrontación, una fuerza militar opositora se apoderó del Palacio Presidencial y secuestró a Chávez; la oposición, entonces, adujo que este había renunciado. Del "vacío político" se formó un gobierno interino con representantes de la asociación de empresarios (Fedecámaras), los militares y la confederación de sindicatos (CTV), dominada por AD, el principal partido de la Cuarta República. El presidente de Fedecámaras, Carmona Estanga, se proclamó presidente, y en su primera aparición televisiva derogó la Constitución de 1999, disolvió la Asamblea Nacional que había sido democráticamente electa, removió "Bolivariana" del nombre de la República, revocó los decretos económicos promulgados por el gobierno de Chávez y destituyó a los gobernadores y alcaldes electos. "En suma, el nuevo presidente rechazó todas las nuevas instituciones democráticas resultantes de la descentralización

bajadores locales también fueron víctimas en la refriega.

y que fueron legitimadas a través del proceso constituyente e institucionalizadas a través de la Constitución de 1999" (García-Guadilla y otros, 2004: 19). Incluso algunos partidarios de la oposición sintieron que Carmona había ido demasiado lejos demasiado rápido, y quedaron desconcertados o estremecidos por la naturaleza autoritaria del golpe.

Casi todos los medios comerciales –televisión, prensa y radio– deliberadamente distorsionaron la información para desacreditar al gobierno y unirse a la oposición (Kaiser, 2003)[19]; la televisora y las radios estatales fueron cerradas a la fuerza por los partidarios del golpe. Las estaciones televisivas comerciales coordinaron una transmisión de partidarios oficialistas disparando de un puente, lo que daba la impresión de que estaban masacrando a los marchistas opositores y hacía al presidente Chávez falsamente responsable de los asesinatos. Durante los dos días del golpe, los simpatizantes del gobierno tuvieron que depender solo de contactos personales y telefónicos, mientras el servicio de teléfonos celulares fue interrumpido[20].

Los enfurecidos partidarios de Chávez tomaron las calles en magnitudes impresionantes (Fotografía 2); la escala de la reacción popular fue totalmente inesperada[21]. En un evento sin precedentes en Latinoamérica, durante los dos días siguientes, un presidente depuesto fue

19 Lo que los canales comerciales de televisión no mostraron fue la calle debajo del puente Llaguno, que estaba vacía a excepción de la Policía Metropolitana. La manipulación de la información es evidente en los documentales *Puente Llaguno. Clave de una masacre* (dirigido por Ángel Palacios, Venezuela, 2004) y *La revolución no será televisada* (dirigido por Kim Bartley y Donnacha O'Briain, Irlanda, 2003). *Puente Llaguno* obtuvo el primer premio en el Festival de Documental Latinoamericano y el premio del Público General en el Festival de Cine de España 2003. *La revolución no será televisada* también ganó numerosos premios internacionales.

20 Dadas estas circunstancias, uno de los más notables aspectos de la organización de las demostraciones a favor de Chávez fue la capacidad de comunicarse por medios alternativos; esto confirma la importancia de los contactos cara a cara en los espacios públicos, localmente llamados "radio bemba" (término popular para "boca", lo que connota la comunicación oral).

21 Especialmente al considerar que la televisión y la radio gubernamentales fueron cerradas por los simpatizantes del golpe y que los canales comerciales transmitían comiquitas y películas. La única información a la que algunos venezolanos tenían acceso era la reportada por canales internacionales por cable, como CNN.

retornado al poder después de la presión popular y de que una facción militar reversara el golpe. Según CNN, aproximadamente tres millones de personas salieron a las calles de Caracas, sumadas a las de otras partes del país, para demandar el retorno de Chávez al poder.

Al inicio, este levantamiento fue reprimido violentamente, pero su escala tornó la represión inviable[22]. En efecto, una multitud rodeó el palacio de Miraflores, animada por la recuperación de este por parte de la guardia presidencial que había permanecido leal a Chávez. A los ministros y oficiales militares identificados con la efímera junta de Carmona se les permitió huir a través de los túneles palaciegos. La muchedumbre, en las afueras, pedía el rescate de Chávez y lo aclamó cuando retornó a Miraflores. Otro grupo inmenso acordonaba el fuerte militar Tiuna, donde se suponía –según falsos rumores– que el presidente era mantenido como rehén, mientras millares protestaban y causaban disturbios callejeros en varios sectores de la ciudad.

Durante el golpe, la nueva junta instigó o aprobó la represión violenta, arrestó a miembros del gobierno chavista y a líderes de organizaciones populares, los humilló públicamente e incluso asesinó a algunos; más de veinte personas fueron asesinadas en los días siguientes[23]. Un gran grupo atacó la embajada cubana[24], mientras la policía municipal de Baruta, donde aquella se localiza, se mantenía al margen; de hecho, el alcalde de Baruta, un oponente de Chávez, participó en el ataque a la

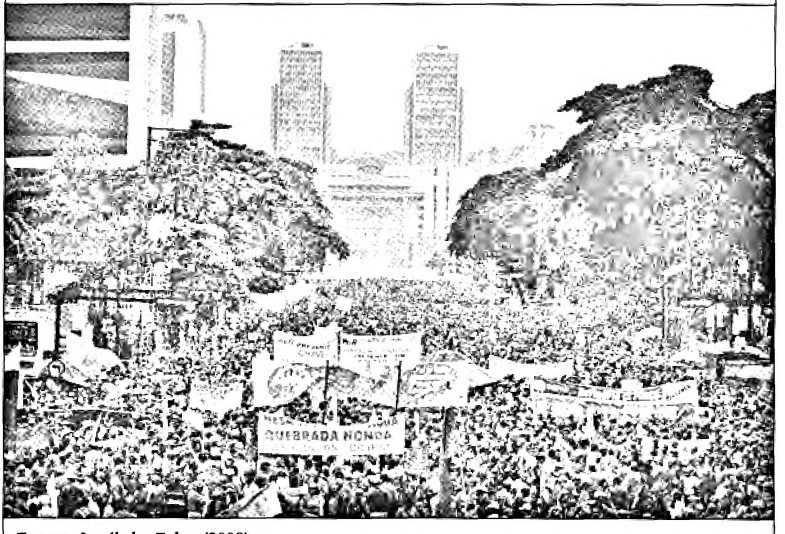
22 La Policía Metropolitana jugó un importante papel, animada por el alcalde mayor Peña, quien apoyó el golpe. Para entonces, sin embargo, grandes facciones de los militares habían declarado su lealtad a la Constitución y al gobierno electo democráticamente, lo que hizo difícil de mantener o justificar la violencia sistemática. Mientras tanto, se afirmaba la participación de los Estados Unidos en el golpe; Washington, de hecho, reconoció públicamente al gobierno de Carmona. Podemos suponer que el gobierno estadounidense retiró más tarde su aprobación oficial en vista de que habría sido difícil justificar el apoyo a un régimen que había adoptado medidas que violaban seriamente los derechos humanos.

23 Una ONG de víctimas del golpe (Asovic) enumera 19 personas muertas el 11 de abril y 27 entre el 12 y el 14.

24 La embajada cubana fue atacada por representar simbólicamente la ideología comunista que ha sido adoptada por el régimen chavista, según muchos de sus oponentes.

embajada[25]. Los sitios del Palacio Presidencial y el fuerte Tiuna –claves para la restauración– estaban en "territorio chavista", aquellas partes de la metrópoli en que los partidarios oficialistas representaban gran mayoría. El Mapa 5 indica las localizaciones del palacio (parroquia 2, Altagracia) y del fuerte (parroquia 19, El Valle), dentro o cerca de los baluartes oficialistas. Adicionalmente, el Mapa 3 también muestra que la accesibilidad de estos lugares era mayor para los chavistas. Estos fueron factores espaciales importantes que favorecieron el retorno del depuesto mandatario a la presidencia.

Fotografía 2. Marcha de los partidarios del gobierno en la avenida Bolívar, 2002



Fuente: Irazábal y Foley (2008).

25 El alcalde de Baruta, Henrique Capriles Radonski, fue imputado en relación a su participación en el violento asedio a la embajada cubana entre el 9 y el 13 de abril del 2002. La principal evidencia en su contra puede verse en las tomas celebratorias transmitidas por la televisión comercial. Véase el documental *Asedio de una Embajada* (dirigido por Ángel Palacios, Venezuela, 2004).

Secuelas de abril del 2002

El golpe de abril del 2002 fue un llamado de atención para que los partidarios del gobierno no desestimaran a la oposición y sus tácticas; fue un período de gran malestar en el que aquellos recibieron "el latigazo de la oposición", cita frecuente que Chávez tomara de Trotsky para motivarlos a la consolidación de sus organizaciones y a la solidaridad grupal. Después del golpe, "la lucha por la existencia devino el medio primario de expresar diferencias" (García-Guadilla y otros, 2004: 20); en esta lucha existencial, las facciones en conflicto cesaron de atenerse al dictado de la ley y actuaron como si la sobrevivencia dependiera de aplastar al otro. En tal enfrentamiento entre el Estado y una fracción de la sociedad civil, como explican García-Guadilla y otros, "el papel de regular o mediar conflictos, asignado al Estado, se hace difícil de cumplir. Más aún, cuando una parte de la sociedad civil no reconoce la legitimidad del Estado en tanto mediador y regulador del conflicto, tal rol no puede ser asumido por este con éxito" (2004: 20).

Lo que siguió fue el conflicto obstinado: aunque el golpe fue fallido y muchos de los opositores estaban frustrados por eso, el movimiento de oposición ganó impulso y algunos de sus líderes se sintieron potenciados; habían desestabilizado al régimen y probado sus fuerzas. Aunque tanto el gobierno como la oposición reconocieron de los labios para fuera la necesidad de diálogo, los conflictos rápidamente remontaron y plantearon una amenaza continua para la democracia:

> El conflicto amenaza al sistema político cuando es "antagónico" (como ocurre en Venezuela), porque la sociedad no es capaz ni de definir su interés colectivo común ni de contribuir a la voluntad general. Incluso peor, cuando la sociedad civil y el Estado no pueden ponerse de acuerdo sobre la definición de la voluntad general porque tienen estructuras ideológicas antagónicas (como también pasa en Venezuela), entonces los actores sociales o la sociedad civil devienen politizadas y tratan de hacer sus intereses particulares sinónimos de la voluntad general (García-Guadilla y otros, 2004: 20).

En vano, la oposición intentó nuevas estrategias: un paro nacional y, después, la salida de Chávez por un referendo sancionado constitucionalmente. Otra vez, el choque de intenciones fue llevado con fuerza a las calles. La parte céntrica de la ciudad, donde se localizan las más de las instituciones públicas, posee una grilla tradicional y peatonal con muchas plazas y unas pocas avenidas anchas; por contraste, las áreas formales de residencia en el este de la ciudad, donde la oposición es mayoría, constituyen una expansión urbana mucho más moderna, entrecruzada de autopistas, con menos plazas y una trama más irregular y menos peatonal. Podría decirse que estas condiciones espaciales facilitaron la congregación chavista. Uno de los pocos sitios que ambos bandos compartieron después de abril del 2002 fue la avenida Bolívar, la cual había sido tradicionalmente el termómetro de preferencias políticas, medidas en términos de la asistencia popular a los mítines durante la Cuarta República. Siguiendo esta tradición, chavistas y antichavistas organizaron encuentros en la avenida Bolívar. Esto, sin embargo, planteó un desafío mayor para la oposición, debido a la localización de la avenida al centro-este, en medio de un "territorio chavista" ahora más definido, lo que llevó a un uso reducido por parte de la oposición.

La oposición usó otros lugares, sin embargo: con frecuencia se congregaban en un nodo de autopista cerca al aeropuerto militar de La Carlota; también organizaban mítines en la sede central del edificio de PDVSA. Quizás el sitio más popular y simbólicamente poderoso fue la plaza Altamira o plaza Francia, rebautizada plaza de la Libertad, en Chacao, una de las pocas plazas grandes en el este de Caracas (Fotografía 3). La plaza fue construida como parte de la expansión moderna de la ciudad, siguiendo la estética francesa en el entonces suburbio diseñado con principios de "ciudad jardín". Hoy en día está en el corazón del territorio antichavista de la metrópoli, y como tal fue apropiada por los grupos oponentes para todo tipo de actividades culturales, políticas, militares y religiosas. Para finales de octubre del 2002, la plaza fue declarada "territorio de la libertad" por oficiales militares y representantes de la sociedad civil. Por meses, la gente se congregaba día y noche para oír alocuciones y participar en actos que exhortaban a la resistencia. Dado

que la municipalidad de Chacao tenía un alcalde abiertamente partidario de derrocar a Chávez, las autoridades locales, incluyendo la policía municipal, defendían a los manifestantes a pesar de su posible transgresión de las ordenanzas.

Esta ocupación de la plaza Altamira duró poco. En un incidente violento, tres muertos –de los que se acusó a una persona mentalmente discapacitada– atemorizaron a las multitudes que frecuentaban la plaza, mientras la fatiga se instalaba después de meses sin progreso político notable. Los vecinos se cansaron del ruido y de la basura e incluso el alcalde local, partidario de la oposición, quiso en algún momento reclamar la plaza de cara a decorarla para Navidad y devolverla a los residentes. Después de una marcha chavista guiada por el entonces vicepresidente José Vicente Rangel, la plaza fue finalmente "reconquistada"[26].

Fotografía 3. Plaza Altamira tomada y rebautizada por la oposición como plaza de la Libertad, 2002

Fuente: Irazábal y Foley (2008).

26 Esta plaza continúa simbolizando la oposición al gobierno y siempre es una referencia para las espasmódicas protestas, tal como ocurrió durante las "guarimbas".

Durante la crisis política y su consiguiente disputa sobre el territorio, ambos grupos recurrieron a la guerra simbólica, apropiándose de emblemas nacionalistas y religiosos. Chávez y sus seguidores adoptaron el rojo para boinas y camisetas, lo que simbolizaba la "revolución" de izquierda; la oposición, por otro lado, usó el amarillo como símbolo de luz y esperanza de un futuro sin Chávez, o el negro, en señal de luto. Para algunos, este último creó vínculos, deliberados o no, con los movimientos fascistas europeos; el negro también podía ser interpretado como indicativo de la diversidad de posiciones ideológicas opositoras, así como de un movimiento más reactivo que asertivo. Las marchas masivas de chavistas han sido llamadas "la marea roja", y las de la oposición, "el gusano de luz". En un país de mayoría católica, Chávez con frecuencia habla de Cristo como guía de su revolución, mientras la oposición invoca a la Virgen María para librarse de aquel. El presidente se refiere intensamente a la nueva Constitución y la muestra en muchas apariciones públicas. Tras haber votado contra ella y perdido, la oposición más tarde la invocó asimismo, con el propósito de legitimar el referendo revocatorio. Finalmente, Simón Bolívar, el padre histórico de la república, después de ser admirado por todos los venezolanos, ha pasado recientemente a ser símbolo de división: los chavistas lo veneran y estiman como la principal inspiración de su "Revolución bolivariana", mientras que los antichavistas se debaten sobre lo que ven como una inconveniente revisión de la historia nacional (González Deluca, 2005; Romero, 2005; Suazo, 2005).

Huelga nacional de finales del 2002 y comienzos del 2003

La polarización continuó después del golpe y alimentó imaginarios sociales que construían al "otro" como enemigo (Lozada, 2004; Salas, 2004). PDVSA, Fedecámaras y la CTV formaron una coalición opositora y planearon una huelga general nacional y un paro de la compañía petrolera para debilitar al gobierno y forzar la renuncia de Chávez. García-Guadilla y otros describen las condiciones en los siguientes términos:

> El golpe de Estado del 2002 no puso fin a la exclusión del "otro" de los modelos normativos propuestos por cada facción. La huelga general de diciembre del 2002, que duró hasta febrero del 2003, llevada a cabo por la oposición en desafío del gobierno, es otro ejemplo del uso de la lucha existencial como medio de articular diferencia. El principal objetivo de la huelga general, llamada "Paro Cívico" por la oposición, era forzar al presidente Chávez a renunciar mediante la interrupción de la industria petrolera nacional. La huelga fue convocada por la Coordinadora Democrática, entidad que representaba las alianzas establecidas entre partidos políticos y organizaciones sociales y económicas pertenecientes a la oposición. Las organizaciones civiles opositoras apoyaron la huelga a pesar de que el gobierno no la reconoció como legal e incluso amenazó con despedir a los empleados públicos que participaran; la amenaza se materializó cuando más de cinco mil profesionales que laboraban en la compañía estatal PDVSA, así como en su instituto de investigación, Intevep, fueron despedidos. Durante los dos meses que duró el "Paro Cívico" hubo numerosas movilizaciones y confrontaciones violentas; los imaginarios sociales de la oposición y el gobierno dieron pábulo al conflicto. El gobierno catalogó a los ciudadanos participantes en la huelga como el "enemigo", los "traidores" y los "antipatriotas"; la huelga fue declarada "ilegal". La oposición, sin embargo, la describió como "Paro Cívico" y justificó sus acciones apelando al artículo 350 de la Constitución, que legitima la desobediencia civil. La "huelga ilegal" o "Paro Cívico" fue desactivada solo después de haber probado ser fallida (2004: 20).

Muchos de las clases gerentes y profesionales se unieron a la huelga, mientras que los propietarios de pequeñas y medianas empresas, así como los obreros, no lo hicieron; como resultado, el paro fue adherido de manera desigual en la ciudad. Muchos sectores del este cerraron sus negocios al tiempo que las calles se vaciaban; mientras tanto, los distritos del oeste y los barrios más pobres permanecieron repletos de gente y actividad. Los negocios más ricos probablemente se oponían a Chávez y podían absorber el costo de la huelga; los más pequeños, incluso cuando eran opositores, tenían menos posibilidad de hacerlo. La mayor parte de los gerentes de PDVSA cumplió con el paro, mientras muchos obreros

no lo hicieron y, al desafiar a sus jefes, recobraron la compañía para el gobierno. Muchos analistas también se refirieron a la huelga como evento mediático, debido a la descripción sesgada que los medios hicieron de las actividades en diferentes sectores de la ciudad (Kaiser, 2003)[27].

La huelga de 2002-2003 de dueños de negocios y el paro de la compañía petrolera resultaron en una escasez de gasolina, un colapso del transporte y déficits en el suministro de otros bienes. Los más afectados no pudieron acumular grandes cantidades de comida ni tenían espacio para almacenarlas. También la clase media se vio afectada, debido a su consumo de productos y servicios importados o valorados en dólares (Wilpert, 2003b: 106). Garantizar gasolina o gas pasó a ser una preocupación diaria; en los barrios, la gente formaba colas cada vez que las bombonas (usadas para cocinar) eran ofrecidas. En cualquier lugar que se formaban estas filas, los espacios circundantes eran temporalmente convertidos en locaciones para discusión política. También la población creó elementos de autogestión, controlando las filas, compartiendo información con respecto a los lugares en que el gas y la gasolina estaban disponibles y asegurando cierta justicia en la distribución.

Los que apoyaban al gobierno ocuparon sectores clave, como la casa matriz de PDVSA en La Campiña (en el municipio Libertador), en un espacio relativamente hostil alrededor de las oficinas[28]; los que apoyaban el paro acamparon en la ya mencionada plaza de la Meritocracia en Chuao. La experiencia del paro de empresarios generó una reacción y reorganización del gobierno. Se requería acción urgente de parte de este para evitar riesgos de escasez de combustible y gasolina. La provisión gubernamental de subsistencia básica para las clases de menores ingresos –la misión Mercal– fue estratégica en sus efectos; se mantuvo y reprodujo después de la huelga como forma de prevenir o cooptar

27 Por ejemplo, los canales de televisión mostraban de manera selectiva calles en las áreas antichavistas en las que los negocios estaban cerrados, lo que denotaba complicidad con el paro.

28 Este edificio es típico del moderno estilo de fortaleza de oficinas públicas en la Cuarta República, la cual erigía barreras reales y simbólicas entre el público –especialmente, los sectores pobres– y los oficiales que, se suponía, debían estar a su servicio.

eventos de la oposición –por ejemplo, los mercados abiertos que tuvieron lugar en tiempos de las marchas opositoras–.

La oposición recurre a la violencia: La "guarimba"

El 27 de febrero del 2004, en el decimoquinto aniversario del Caracazo, la oposición marchó para pedir el retiro del presidente Chávez, mientras una cumbre de líderes de países no alineados (G-15) tenía lugar en el teatro Teresa Carreño. Por razones de seguridad, a la marcha se le negó permiso para proceder a lo largo de la avenida Libertador, en cuyo extremo se encuentra el teatro, por lo que siguieron enfrentamientos violentos con la Guardia Nacional. Como protesta, miembros de la clase media empezaron a arrasarlo todo en una así llamada "guarimba", que secuestró considerables sectores al este de la ciudad. Los actos de guarimba continuaron entre febrero y marzo del 2004 en Caracas y otras ciudades venezolanas. El fin era alterar el orden violentamente para provocar intervención militar represiva, deslegitimar al gobierno y motivar una acción internacional. Concebida por Robert Alonso, miembro del grupo derechista Bloque Democrático, el objetivo era crear una anarquía que paralizara al país. Siguiendo estas formas extremas, las tácticas de guarimba incluían quemar cauchos de carro y basura en las calles, junto al uso de explosivos caseros como cocteles molotov y armas convencionales. Paralelamente, los medios de comunicación activaron una "guarimba mediática" (según la escritora Earle Herrera), al cuestionar a las autoridades públicas y generar un ambiente de terror. Afortunadamente, falló la convocatoria para la participación masiva en las guarimbas: fue condenada por el respeto a Chávez y a los fundamentos democráticos de los venezolanos, incluso por muchos de la oposición (García Danglades, 2004). Las guarimbas fueron canceladas porque se hicieron extremadamente impopulares al dificultar la libre circulación y ensuciar los vecindarios (García-Guadilla, 2005).

El referendo de agosto del 2004

En contraste con el golpe de Estado y la huelga ilegal, la oposición también hizo uso de la estrategia democrática de elección revocatoria, la cual surgió como resultado de las movilizaciones políticas y callejeras en el 2003 y el 2004[29]. Desde 1998, la oposición no había desplegado tal fuerza democrática y potencial organizacional, factores que convencieron a muchos de la victoria segura; la segregación espacial y social de las fuerzas opositoras reforzó tal impresión. Si todos los que los opositores conocían, todos los que encontraban y todos con los que conversaban en sus vidas diarias compartían su antagonismo político hacia el gobierno, ¿cómo podrían haber concebido no ganar el revocatorio? Los medios de comunicación se oponían abiertamente a Chávez y jugaron un gran papel en reafirmar estas percepciones en su distorsionado retrato de manifestaciones públicas, marchas y votaciones. Los partidarios del gobierno, de manera similar, rechazaron a los medios tradicionales y pasaron a depender de la televisora y las radios estatales, así como de un número limitado de publicaciones alternativas.

Así, la participación en eventos extraordinarios en los espacios públicos de Caracas y el tratamiento de los mismos por los medios tuvieron un papel determinante en la creación de las dispares comunidades imaginadas que los venezolanos de alianzas políticas diferentes fabricaban en tanto idealizaciones de su ciudad y nación. La construcción mediática de los poderes de la oposición no se reflejó en los subsiguientes resultados del revocatorio, que, como se describe en el Mapa 5, reconfirmó a Chávez en el poder (con el 59% de los votos) y restableció la segregación política de la metrópoli. La legitimidad de las elecciones fue confirmada por observadores internacionales, incluyendo la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Centro Carter, dirigido por el expresidente estadounidense. Sin embargo, en parte animados por sus líderes políticos e influenciados por las visiones fabricadas por

29 La Constitución de 1999 permite un revocatorio de representantes electos después de que hayan servido la mitad de su período. Se afirma que la Constitución venezolana es la única en el mundo que sanciona tal mecanismo.

los medios, muchos miembros de la oposición no reconocieron lo que reclamaban como resultados electorales fraudulentos. Sus reacciones fueron sentidas en las calles poco después.

Discusión de la dinámica socioespacial

En las tensiones entre la creación y la contestación de nuevos proyectos políticos, las "comunidades imaginadas" son redefinidas, como lo son las nuevas subjetividades de solidaridad y pertenencia. El efecto en el espacio público es una desestabilización de los significados tradicionales de lugar. Las revisiones postradicionales de la historia nacional preestablecida son llevadas a cabo a través de la validación y del tejido de historias subalternas. También la actual condición sociopolítica en Venezuela presenta una dimensión "posglocal" más destacada, en la medida en que lo global y lo local se alojan el uno en el otro en una miríada de formas fluidas. Actualmente, Venezuela es un punto principal de referencia para estudios de caso comparativos guiados por analistas y académicos internacionales; activistas y agencias de alrededor del mundo participan en la política venezolana y en la política local del espacio público, lo que incluye la participación en las marchas. En el 2006, el Foro Social Mundial tuvo lugar en Caracas y el presidente venezolano viajó por el mundo para promover el mensaje bolivariano y cabildear para los tratados de cooperación supranacional en Latinoamérica. El turismo político en el país se está desarrollando.

Una transformación profundamente liberadora ha sido la manera como muchas personas que previamente la pasaban mal –apenas "haciendo vida" en el país– han devenido sujetos efectivos capaces de "hacer historia" (Flacks, 1988). Así, en una escala similar quizá solo a la de Cuba, el actual proceso en Venezuela destaca en el sentido en que revela la dinámica inversa de la noción habermasiana de colonización del "mundo de la vida" por parte del "sistema". Este último está experimentando en Venezuela transformaciones críticas de consecuencias todavía desconocidas. De hecho, hay disputas significativas entre chavistas

sobre si las transformaciones deberían ser de naturaleza reformista o revolucionaria (Ellner, 2005), dado que tanto la oposición nacional como internacional al régimen organizan poderosos desafíos a esos cambios. Prestar atención a esta dinámica no solo puede ayudarnos a entender transformaciones de la democracia y la ciudadanía, reformas y revoluciones, sino también guiarnos hacia fines más pacíficos y justos.

Todavía está por verse cómo las así llamadas "democracias de la tercera ola" en América Latina se transforman por el "gran rechazo" al neoliberalismo del presente. Es demasiado temprano para decir si la actual política de calle equivale a más que una reacción a las medidas neoliberales y al desencanto con anteriores regímenes y partidos, y si puede catalizar una visión de proyectos sociopolíticos alternativos. Pero mientras la gente lleva sus quejas y esperanzas colectivas a las calles, la conciencia política se transforma. Mientras el régimen venezolano presiona por el avance de políticas y prácticas posneoliberales, el país deviene la cresta de la ola que está abriendo potencialmente Latinoamérica a una nueva era, creando expectativas esperanzadas para muchos y temores profundos para otros. En este proceso, los límites de los terrenos invitados e inventados (aquellos no permitidos previamente, sin embargo, apropiados) de la ciudadanía están siendo retrazados continuamente (Cornwall, 2002; Miraftab, 2004). Los caraqueños y otros venezolanos han salido a las calles de su capital para denunciar la "ciudad posjusticia" (Mitchell, 2001) y explorar qué pueden ser el país y la "ciudad justa" (Fainstein, 2000). Caracas ha devenido así la "ciudad contestataria" (Cantú Chapa, 2005) o "ciudad insurgente" (Holston y Appadurai, 1999) por excelencia en Latinoamérica, y, como lo puso el *New York Times*, la "nueva meca para la izquierda" (Forero, 2006).

La ciudadanía cultural en Caracas ha sido construida y expandida colectivamente desde 1998 (Delanty, 2002); también ha sido modelada a través de luchas por derechos en disputas sobre significados y prácticas de la participación y sobre la distribución de recursos, así como sobre el establecimiento de límites entre lo público y lo privado, lo social y lo individual, lo moderno y lo tradicional (Tamayo, 2004). Los que eran previamente excluidos y carentes de derechos por cuestiones de etnia,

clase, sexo, género, religión, cultura y orígenes nacionales han reclamado su ciudadanía (Kearns, 1995; Miraftab, 2004); pero, aunque sea "insurgente" (Holston, 1995), ella no necesariamente equivale a una ciudadanía inclusiva (Gaventa, 2002). Mientras progresan estas luchas –muchas de las cuales han sido realizadas como juegos de suma-cero–, otros han decidido voluntariamente no formar parte del proceso actual, y esperan que su falta de participación deslegitimará al gobierno chavista.

A pesar de estos desafíos, la ciudadanía inclusiva en Caracas está siendo construida y actuada en una manera que representa la dinámica de la ciudadanía activa y *performative* discutida por Kearns (1995), Miraftab (2004) y Boudreau (2000). En concreto, en la reciente Constitución venezolana, los derechos de ciudadanía han sido expandidos para la mujer, los grupos indígenas y los desposeídos; permanece una brecha, sin embargo, entre la ciudadanía como está definida por ley y la que es ejecutada en la vida diaria, descrita como "paradoja performativa" (Lee, 1998). Esa brecha no se amplía debido a que la gente desafía la ley con sus prácticas y la hace más incluyente, lo cual es el caso más común cuando tal situación tiene lugar. En cambio, la novedad de la actual "paradoja performativa" en Venezuela es que desafía prácticas individuales e institucionales –desde todos los lados del espectro político– que no están a la altura de las expectativas creadas por la nueva Constitución y sus leyes derivadas.

Los sucesos extraordinarios y efímeros en los espacios públicos de Caracas continúan teniendo un efecto transformador en la ciudad y la nación; estos espacios de ciudadanía insurgente "comprometen en la práctica la naturaleza problemática de pertenencia a la sociedad" (Holston y Appadurai, 1999: 50), desafiando explícitamente la ciudad posjusticia en tanto resultado inequitativo de un neoliberalismo sin obstáculos. Para muchos, ofrecen esperanza para el futuro de la ciudad justa, pero su realización no es un regalo: queda por cursar la difícil trayectoria desde la elevación de la conciencia política hasta la acción efectiva de políticas progresistas. Los obstáculos son por igual externos –por ejemplo, la oposición nacional e internacional al régimen– como internos, dado que la corrupción, el oportunismo, la ineptitud y la política exclusivista

de la Cuarta República no son fácilmente sobrepasados en la Quinta.

Dos de las perspectivas de Wincour (2003) sobre la transformación de la ciudadanía son relevantes aquí. Primeramente, los ciudadanos tienen derecho a un espacio público de calidad. De acuerdo con eso, grupos minoritarios y marginales deberían poder usar el espacio público como estrategia de visibilidad y sobrevivencia. Esto ha sido cumplido en Caracas en gran medida por las nuevas prácticas de interacción y control social, consumo y producción del espacio. Sin embargo, puede decirse que el sentido de responsabilidad asociado con el uso de los espacios públicos no se ha desarrollado al mismo ritmo que los derechos de uso, y los problemas de mantenimiento y preservación se han empeorado en algunos casos.

La segunda perspectiva explora el impacto de los medios en transformar la participación en los espacios públicos, los cuales hemos mostrado como extensivos. Los reportes de demostraciones, marchas, paros, huelgas, disturbios y votaciones han llevado a todos a habitar "comunidades imaginadas" (Anderson, 1983) y "geografías imaginadas" (Gregory, 1994) en Venezuela, las cuales están construidas sobre gente que cree que la ciudad que habitan es la que les es representada de manera distorsionada a través de imágenes y discursos mediáticos selectivos y editados. En contraposición, los medios también han sido inteligente y efectivamente utilizados para asegurar y expandir espacios y prácticas de ciudadanía insurgente; en efecto, el rol hegemónico de aquellos resultó en un "gran rechazo" informativo en la medida en que la comunicación de base (boca a boca, computadora a computadora y celular a celular) revirtió el golpe de Estado del 2002.

Así, permanece el desafío para la radicalización de la democracia en Venezuela, la cual ha progresado a través de la repetida legitimación de este régimen a través de elecciones, la promulgación de una nueva Constitución y leyes, y la extensión de los derechos de política callejera para todos los venezolanos. Sin embargo, esto ha sido dificultado, por las características ya mencionadas: corrupción, oportunismo, ineptitud y política excluyente por parte del gobierno, así como por falta de cooperación y por el sabotaje rotundo de parte de las élites opositoras naciona-

les e internacionales. Para permitir un Estado de completa participación y deliberación democrática, es necesario el respeto mutuo, tanto por parte de partidarios como de disidentes del nuevo régimen político.

Comentarios finales

En la compleja política de calle que tiene lugar en Caracas, hay una gama de procesos de reterritorialización y desterritorialización que está en juego. En este sentido, desde el punto de vista del espacio urbano, varios puntos merecen ser destacados. Primero, los espacios públicos caraqueños han sido los escenarios para expresar, tanto pacífica como violentamente, una amplia gama de posiciones políticas bien a favor o en contra del nuevo régimen. Durante el golpe y sus secuelas, los espacios públicos fueron sitios cruciales para la representación del descontento y para la reformulación de la ciudadanía a través de marchas, declamaciones, disturbios, grafitis y otros actos callejeros, extraídos de las tácticas de manifestación y protesta tanto tradicionales como insurreccionales.

En segundo lugar, más allá de los incidentes que tuvieron lugar en tiempos y espacios reales, se puede identificar una dimensión crítica y superpuesta de los fatídicos eventos de abril del 2002 y sus secuelas. Esta viene dada por el desajuste entre los reales y variados sucesos que ocurrían en diferentes áreas de la metrópoli caraqueña y la ciudad virtual presentada simultáneamente por los medios a través de una construcción manipulada y editada de verdades parciales. En un intento por contrarrestar la información mediática distorsionada, los espacios públicos fueron disputados y ocupados por parte de los grupos en conflicto, así como usados en tanto expresiones de solidaridad y comunicación cara a cara entre miembros de la misma afiliación política.

Desde el punto de vista de la arquitectura, los edificios públicos –sedes del poder político y militar en Venezuela–, por un lado, y los privados –casas matrices de medios, la compañía petrolera y otros en la oposición–, por el otro, funcionaron como íconos de poder alrededor de los cuales se congregó la gente. De manera significativa, tanto

la localización de estos edificios como su accesibilidad han jugado un papel crucial.

Este estudio revela que en Venezuela permanece, para los actores políticos, el desafío de encontrar caminos "para transformar la lucha existencial de nuevo en una disputa" (García-Guadilla y otros, 2004: 20). Por un lado, el Estado tiene que recuperar legitimidad a los ojos de todos los venezolanos y establecer puentes con todos los sectores para negociar el conflicto a través de medios constitucionales; por otro lado, la sociedad civil deberá esforzarse por definir una identidad colectiva común para tratar con el Estado y reconocer su rol mediador.

Los espacios urbanos y los edificios han pasado a estar simbólica y prácticamente imbricados con los conflictos en curso, lo que permite que la polarización y las inequidades sociales del país encuentren expresión y contestación en el espacio urbano de la capital. Así como los eventos extraordinarios en el pasado reciente de Caracas han marcado el actual estado de acontecimientos en Venezuela, los lugares ordinarios pueden ser catalizadores para la conciencia de los ciudadanos de cara a maniobrar desde luchas existenciales no democráticas hacia una cultura política democrática y participativa. Al distinguir entre hacer vida y hacer historia (Flacks, 1988), celebramos que la gente de Caracas se haya levantado ante el desafío de hacer historia a través de la movilización política extraordinaria en el espacio público. Esperamos que también aproveche esta oportunidad única para recrear la vida ordinaria de una manera más democrática, inclusiva y justa.

Bibliografía

Anderson, Benedict (1983). *Imagined communities: Reflections on the origins and spread of nationalism*. Londres/Nueva York: Verso.

Appenzeller, Tim (2004). "The end of cheap oil". *National Geographic*, Vol. 205, N.° 6: 80-109.

Architectural League of New York (2002). "Barrio: No plan as plan". Disponible hasta 2008 en www.worldview.org/caracas/barrios/

html (actualmente http://www.worldview.org) visitado el 27 de febrero del 2006.

Boudreau, Julie-Anne (2000). *The megacity saga: Democracy and citizenship in the global age*. Montreal: Black Rose Books.

Caldeira, Teresa (2000). *Crime, segregation and citizenship in São Paulo*. Berkeley, CA: University of California Press.

Camejo, Yrayma (2002). "Estado y mercado en el proyecto nacional bolivariano". *Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales*, Vol. 8, N.° 3: 13-39.

Cantú Chapa, Ruben (2005). *Globalización y centro histórico. Ciudad de México, medio ambiente sociourbano*. México: Plaza y Valdés.

Cornwall, Andrea (2002). "Locating citizen participation". *IDS Bulletin*, Vol. 33, N.° 2: 49-58.

Delanty, Gerard (2002). "Two conceptions of citizenship: a review of recent literature on culture and citizenship". *The Global Review of Ethnopolitics*, Vol. 1, No. 3: 60-66.

Ellner, Steve (2005). "Revolutionary and non-revolutionary paths of radical populism: Directions of the 'Chavista' movement in Venezuela". *Science & Society*, Vol. 69, N.° 2: 160-190.

Ellner, Steve y Daniel Hellinger (eds.) (2004). *Venezuelan politics in the Chávez era: Class, polarization and conflict*. Boulder, CO: Lynne Riener.

Fainstein, Susan (2000). "New directions in planning theory". *Urban Affairs Review*, Vol. 35, N.° 4: 451-478.

Flacks, Richard (1988). *Making history vs. making life*. Nueva York: Columbia University Press.

Forero, Juan (2006): "Caracas calling: A new Mecca for the left". *The New York Times*, marzo 22. Disponible en goo.gl/6EC1z, visitado el 18 de julio del 2012.

García Danglades, Antonio (2004). "La 'guarimba', delito común y crimen contra la paz". *Aporrea*, N.° 3, goo.gl/8p6Cc, visitado el 18 de julio del 2012.

García-Guadilla, María Pilar (1998). "Ajuste económico, desdemocratización y procesos de privatización de los espacios públicos en Venezuela". *Revista Interamericana de Planificación*, Vol. 30, N.° 119-120: 77-89.

García-Guadilla, María Pilar (2002). "Actores, organizaciones y movimientos sociales en la Venezuela del 2002". En *Venezuela: Rupturas y continuidades del sistema político (1999-2001)*, Marisa Ramos (ed.): 247-278. Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca.

García-Guadilla, María Pilar (2003). "Territorialización de los conflictos sociopolíticos en una ciudad sitiada: Ghettos y feudos en Caracas". *Ciudad y Territorio. Estudios Territoriales*, N.° 136-137: 421-440.

García-Guadilla, María Pilar (2004). "Civil society: Institutionalization, fragmentation, autonomy". En *Venezuelan politics in the Chávez era: Class, polarization and conflict*, Steve Ellner y Daniel Hellinger (eds.): 179-196. Boulder, CO: Lynne Riener.

García-Guadilla, María Pilar (2005). "The democratization of democracy and social organizations of the opposition: Theoretical certainties, myths and praxis". *Latin American Perspectives*, Ed. 141, Vol. 32, N.° 2: 109-123.

García-Guadilla, María Pilar, Ana Mallen y Mariluz Guillén (2004). "The multiple faces of Venezuelan civil society: Politization and its impact on democratization". Ponencia presentada en Proceedings of XXV Latin American Studies Association International Congress, octubre 7-9, Las Vegas, EE. UU. Disponible en goo.gl/ze1XM, visitado el 18 de julio del 2012.

Gaventa, John (2002). "Exploring citizenship, participation and accountability". *IDS Bulletin*, Vol. 33, N.° 2: 1-11.

González Deluca, María Elena (2005). "Historia, usos, mitos, demonios y magia revolucionaria". *Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales*, Vol. 11, N.° 2: 159-186.

Gregory, Derek (1994). *Geographical imagination*. Oxford: Blackwell.

Haggerty, Richard A. (ed.) (1993). *Venezuela. A country study*. Washington D. C.: Federal Research Division/Library of Congress.

Holston, James (1995). "Spaces of insurgent citizenship". *Planning Theory*, N.° 13: 35-52.

Holston, James y Arjun Appadurai (1999). "Cities and citizenship". En *Cities and citizenship*, James Holston (ed.): 1-20. Durham, NC: Duke University Press.

Irazábal, Clara y John Foley (2008). "Space, revolution and resistance: Ordinary places and extraordinary events in Caracas". En *Ordinary places, extraordinary events. Citizenship, democracy and public space in Latin America*, Clara Irazábal (ed.): 144-169. Londres/Nueva York: Routledge.

Kaiser, Patricia (2003). "Estrategias discursivas antichavistas de los medios de comunicación". *Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales*, Vol. 9, N.° 3: 231-253.

Kearns, A. (1995) "Active citizenship and local governance: Political and geographical dimensions". *Political Geography*, N.° 14: 155-175.

Lander, Luis y Margarita López Maya (2005). "Referendo revocatorio y elecciones regionales en Venezuela: Geografía electoral de la polarización". *Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales*, Vol. 11, N.° 1: 43-58.

Lee, Benjamin (1998). "Peoples and publics". *Public Culture*, Vol. 10, N.° 2: 371-394.

López Maya, Margarita (1999). "La protesta popular venezolana entre 1989 y 1993 en el umbral del neoliberalismo". En *Lucha popular, democracia, neoliberalismo: Protesta popular en América Latina en los años del ajuste*, Margarita López Maya (ed.): 211-235. Caracas: Nueva Sociedad.

López Maya, Margarita (2003). "Movilización, institucionalidad y legitimidad". *Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales*, Vol. 9, N.° 1: 211-228.

López Maya, Margarita y Luis Lander (2006). "Novedades y continuidades de la propuesta popular en Venezuela". *Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales*, Vol. 6, N.° 1: 11-30.

Low, Setha (2000). *On the plaza: The politics of public space and culture*. Austin, TX: University of Texas Press.

Low, Setha y Neil Smith (eds.) (2006). *The politics of public space*. Oxon: Routledge.

Lozada, Mireya (2004). "El otro es el enemigo: Imaginarios sociales y polarización". *Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales*, Vol. 10, N.° 2: 195-209.

Márquez, Patricia y Ramón Piñango (2003). *En esta Venezuela: Realidades y nuevos caminos*. Caracas: IESA.

McCaughan, Michael (2004). *The battle of Venezuela*. Londres: Latin American Bureau.

Medina, Medófilo (2001). "Chávez y la globalización". *Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales*, Vol. 7, N.° 2: 115-128.

Méndez, Miguel (2004). *Conflicto y reconciliación en Venezuela*. Caracas: Alfadil.

Miraftab, Faranak (2004). "Invented and invited spaces of participation: Neoliberal citizenship and feminists' expanded notion of politics". *Journal of Transnational Women's and Gender Studies*, Vol. 1, N.° 1. Disponible en goo.gl/HBS9c, visitado el 18 de julio del 2012.

Mitchell, Don (2001). "Postmodern geographical praxis? The postmodern impulse and the war against the homeless in the post-justice city". En *Postmodern geography: Theory and praxis*, Claudio Minca (ed.): 57-92. Oxford: Blackwell.

Navarrete, Rodrigo (2005). "Presentación: ¡El pasado está en la calle!". *Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales*, Vol. 11, N.° 2: 127-140.

ONU y Cepal (2001). *57 (Informe). Foro sobre el Delito y la Sociedad, Vol. 1, N.° 1, febrero*. Nueva York: Naciones Unidas, Centro para la Prevención Internacional del Delito.

Riutort, Matías (1999). "El costo de erradicar la pobreza". En *Pobreza: Un mal posible de superar. Vol. 1*: 15-26. Caracas: Proyecto Pobreza de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB).

Roberts, Kenneth (2004). "Social polarization and the populist resurgence in Venezuela". En *Venezuelan politics in the Chávez era: Class, polarization and conflict*, Steve Ellner y Daniel Hellinger (eds.): 55-72. Boulder, CO: Lynne Riener.

Rodríguez, Isaías (2005). *Abril comienza en octubre*. Caracas: s/e.

Romero, Juan Eduardo (2005). "Usos e interpretaciones de la historia

de Venezuela en el pensamiento de Hugo Chávez". *Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales*, Vol. 11, N°. 2: 211-236.

Salas, Yolanda (2004). "La 'Revolución Bolivariana' y la 'sociedad civil': La construcción de subjetividades nacionales en situación de conflicto". *Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales*, Vol. 10, N.° 2: 91-109.

Santamaría, Gema (2004). "El trágico triunfo de Chávez o la democracia que nunca fue". *Foreign Affairs en Español*, Vol. 4, N.° 4: 70-78.

Sassen, Saskia (1996). "Whose city is it?". *Traditional Dwellings and Settlements Review*, Vol. 8, N.° 10: 11.

Tamayo, Sergio (2004). "Espacios ciudadanos", en Los *últimos cien años, los próximos cien*, Ariel Rodríguez y Sergio Tamayo (eds.): 127-158. México: Universidad Autónoma Metropolitana.

Suazo, Félix (2005). "Usos políticos de la memoria: Devoción, desdén y asedio de las estatuas". *Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales*, Vol. 11, N.° 2: 251-258.

Vila Planes, Enrique (2003). "La economía social en el proceso bolivariano. Ideas controversiales". *Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales*, Vol. 9, N.° 3: 111-143.

Wilpert, Gregory (2003a). "Venezuela's mission to fight poverty". *Venezuelanalysis.com*, N.° 11. Disponible en goo.gl/8Xx5X, visitado el 25 de febrero del 2006.

Wilpert, Gregory (2003b). "Collision in Venezuela". *New Left Review*, N.° 21: 101-116.

Wincour, Rosalía (2003). "La intervención mediática de la ciudadanía". En *Espacio público y reconstrucción de ciudadanía*, Patricia Ramírez Kurt (ed.): 231-252. México: Flacso.